



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:

LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

1314

1

México, Distrito Federal, dos de enero del año dos mil quince. Integrada debidamente la Primera Sala Auxiliar, por los magistrados que la componen licenciados ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA en su carácter de ponente, FRANCISCO MANUEL OROZCO GONZALEZ presidente de la sala e ISMAEL POSADA ARÉVALO, Primer Secretario de la Segunda Ponencia de conformidad con el artículo 8° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ante la presencia del secretario de acuerdos quien da fe, Licenciado Martín González Ledesma, se procede a dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión fiscal R.F. 694/2013, interpuesto por el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "1" de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en el juicio de nulidad número 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4 promovido por [REDACTED], y,

RESULTANDO:

1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el día tres de noviembre de dos mil nueve, [REDACTED] en legal representación de [REDACTED] promovió demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 900-07-01-2009-41670 de fecha 21 de agosto de 2009, emitido por la Administración de Fiscalización Internacional "1" de la Administración Central de Fiscalización Internacional, del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se rechaza la deducción efectuada por viáticos y gastos de viaje y eventos y convenciones, le impuso una multa de \$7'942,466.00, por haber declarado pérdidas mayores a las realmente sufridas en el ejercicio fiscal de 2003. A dicho escrito de demanda correspondió el número de expediente 28599/09-17-10-3, radicado en la Décima Sala Regional Metropolitana de este Tribunal.

2. Seguido en todas sus etapas el juicio de nulidad, con sentencia de fecha doce de julio de dos mil trece, se resolvió:

"I.- LA PARTE ACTORA PROBO SU ACCION, EN CONSECUENCIA;

II.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCION COMBATIDA, PRECISADA EN EL RESULTANDO PRIMERO DEL PRESENTE FALLO.

III.- NOTIFÍQUESE."

3. Por oficio número 900 04 01-2013-57243 presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal el dos de septiembre de dos mil trece, el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "1", de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia de fecha doce de julio de dos mil trece; por lo que, con acuerdo de diez de septiembre de dos mil trece, se tuvo por recibido y se ordenó correr traslado al tercero perjudicado.

4. Con oficio A-1995, presentado en oficialía de partes de la Primera Sala Auxiliar de este tribunal el cinco de noviembre de dos mil catorce, la actuario judicial del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitió copia certificada del testimonio de la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil catorce, en el recurso de revisión fiscal **R.F. 694/2013**, que resolvió lo siguiente:

SÉPTIMO. A juicio de este Tribunal Colegiado resultan esencialmente fundados los argumentos esgrimidos por la recurrente en el primer y tercer agravio de la recurrente.

Para demostrarlo, en principio, conviene tener presente el contenido de los artículos 29, 31, fracción I y 32, fracciones III y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres:

"Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, aun cuando correspondan a operaciones realizadas en ejercicios anteriores.

II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas inclusive en ejercicios posteriores.

No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

3

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.

IV. Las inversiones.

V. (DEROGADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2002)

VI. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere el primer párrafo de la fracción II de este artículo.

VII. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establezca la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.

VIII. Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso cuando éstas sean a cargo de los trabajadores.

IX. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente pagados. Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora cubren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél en el que se incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al último periodo citado.

X. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 46 de esta Ley.

XI. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 110 de esta Ley.

Cuando por las adquisiciones realizadas en los términos de la fracción II de este artículo o por los gastos a que se refiere la fracción III del mismo, los contribuyentes hubieran pagado algún anticipo, éste será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 31, fracción XIX de esta Ley."

"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

...

"Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

...

III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general.

...

V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del

Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios profesionales.

Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de \$750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se eroguen en territorio nacional, o \$1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación el contribuyente únicamente acompañe la relativa al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje.

Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados, serán deducibles hasta por un monto que no exceda de \$850.00 diarios, cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al hospedaje o transporte.

Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto que no exceda de \$3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente acompañe a la documentación que los ampare la relativa al transporte.

Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y en la documentación que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinado a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible en ningún caso.

Del primero de los preceptos reproducidos se desprende las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes, entre las cuales se encuentran los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.

En relación con dicho precepto, el numeral 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las deducciones autorizadas ahí previstas deberán reunir, entre otras cuestiones, el que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esa ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Finalmente, del artículo 32 se desprende que establecen las erogaciones que por disposición expresa no son deducibles (artículo 32), entre las que se encuentran, los gastos erogados por obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, (excepto cuando estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general o bien), así como viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se



EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

5

apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente (excepto en aquellos casos que los viáticos o gastos de viaje se otorguen a personas que tengan relación de trabajo con el contribuyente o le estén prestando servicios profesionales).

Precisado lo anterior, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 1662/2006 interpretó el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos -cuyo texto es igual al que se analiza- y en la parte que interesa indicó lo siguiente:

"...En este contexto, los requisitos que permiten determinar el carácter deducible de algún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios que buscan ser objetivos, como son la justificación de las erogaciones por considerarse necesarias, la identificación de las mismas con los fines de la negociación, la relación que guardan los conceptos de deducción con las actividades normales y propias del contribuyente, así como la frecuencia con la que se suceden determinados desembolsos y la cuantificación de los mismos.

Ciertamente, para la obtención del ingreso, el contribuyente requiere de la realización de determinados gastos que le son absolutamente necesarios para la consecución de su objeto social y del ingreso, como lo es la adquisición de materia prima, el pago de salarios a sus trabajadores, los gastos de administración del negocio, etcétera; este tipo de erogaciones que deben efectuarse son los que se consideran necesarios. Respecto de tales desembolsos, el legislador debe valorar la erogación de los mismos y —en principio— reconocer su deducibilidad como concepto, ya que son gastos inevitables e indispensables sin los cuales la obtención de ingresos se pondría en riesgo.

Por otra parte, existen otro tipo de gastos que el contribuyente puede realizar o no, es decir, son contingentes, ya que no son necesarios para la obtención de ingresos sino que su realización es alternativa y no está estrechamente vinculada a la obtención de recursos económicos. Este tipo de gastos, al no ser indispensables, el legislador puede o no considerar factible la deducción de los mismos, o de una parte de ellos, ya que su erogación no condiciona la obtención del ingreso en forma alguna.

Como ha sido apuntado en los párrafos precedentes, la indispensabilidad en las deducciones constituyen el principio rector de éstas —y, de hecho, es el criterio que permite distinguir entre las erogaciones que el legislador debe reconocer en la determinación de la capacidad contributiva que justifica la concurrencia del causante para el sostenimiento de los gastos públicos—, ante la evidente necesidad de realizar determinadas erogaciones como medio, tanto para la consecución de los fines de la empresa, como para la generación de los ingresos —que, a su vez, justifican la contribución al levantamiento de las cargas públicas—.

Lo anterior es reconocido en los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de los cuales se desprende que las personas morales que tributan en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

Las disposiciones señaladas efectúan una mención genérica del requisito apuntado, lo cual se justifica al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de 'estrictamente indispensables'; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar dicho concepto, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.

(...)

En relación con los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta para determinar cuándo puede considerarse un gasto como estrictamente indispensable para una empresa, a saber:

a. Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad de la empresa;

b. Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;

c. Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;

d. Que deben representar un beneficio o ventaja para la empresa en cuanto a sus metas operativas;

e. Que deben estar en proporción con las operaciones del contribuyente.

En tales condiciones, el carácter de indispensable se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.

De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social".

De la ejecutoria en cita, derivó la tesis 1a. XXX/2007, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, febrero de dos mil siete, materia administrativa, página seiscientos treinta y siete, de la literalidad siguiente:

"DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. De la lectura de los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que las personas morales que tributan en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Las disposiciones mencionadas efectúan una mención genérica del requisito apuntado, lo cual se justifica al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de 'estrictamente indispensables'; por tanto,



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar dicho concepto, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate. En términos generales, es dable afirmar que el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio. De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los ingresos que se obtienen, son aquellos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social. A partir de la indispensabilidad de la deducción, se desprende su relación con lo ordinario de su desembolso. Dicho carácter ordinario constituye un elemento variable, afectado por las circunstancias de tiempo, modo y lugar -y, por ende, no siempre es recogido de manera inmediata por el legislador, en razón de los cambios vertiginosos en las operaciones comerciales y en los procesos industriales modernos-, pero que de cualquier manera deben tener una consistencia en la mecánica del impuesto. En suma, es dable afirmar que los requisitos que permiten determinar el carácter deducible de algún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios que buscan ser objetivos, como son la justificación de las erogaciones por considerarse necesarias, la identificación de las mismas con los fines de la negociación, la relación que guardan los conceptos de deducción con las actividades normales y propias del contribuyente, así como la frecuencia con la que se suceden determinados desembolsos y la cuantificación de los mismos".

De la ejecutoria y tesis transcritas, se obtiene que el carácter de indispensabilidad se encuentra estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, **debe tratarse de un gasto necesario para que cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral, y que le reporte un beneficio, de tal manera que de no realizarlo, se tendrían que suspender las actividades de la empresa, o éstas necesariamente disminuirían, es decir, cuando de no llevarse a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de aquélla, viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio.**

De eso se sigue, que los gastos a que alude la fracción I, del artículo 31, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social, de donde se infiere que en este supuesto, el legislador, únicamente, podría excluir erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando existieran motivos de carácter jurídico, económico y/o social, que justificara ese proceder.

Sobre el tema también se invoca, la tesis 2a. CIII/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde interpretó el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos -cuyo texto es igual al que se analiza-, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, página 565, que dice:

"RENTA. INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO "ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).

El precepto citado establece que las deducciones autorizadas por el título II, relativo a las personas morales, entre otros requisitos, deben ser "estrictamente indispensables" para los fines de la actividad del contribuyente. Ahora bien, la concepción genérica de dicho requisito se justifica al atender a la cantidad de supuestos que en cada caso concreto pueden recibir aquel calificativo; por tanto, como es imposible definir todos los supuestos factibles o establecer reglas generales para su determinación, dicho término debe interpretarse atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate. En tales condiciones, el carácter de indispensable se encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal sus actividades, de manera que de no realizarlo, éstas tendrían que disminuirse o suspenderse; de ahí que el legislador únicamente permite excluir erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando existan motivos de carácter jurídico, económico y/o social que lo justifiquen."

De este criterio se tiene que el carácter de indispensable se encuentra vinculado con la consecución del objeto social de la empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que se cumplimenten en forma cabal las actividades de las empresas, de manera que de no realizarlo, éstas tendrían que disminuirse o suspenderse y, que por ello, el legislador únicamente permite excluir erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando existan motivos de carácter jurídico, económico y/o social que lo justifiquen.

En este orden de ideas, se puede concluir que el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debe interpretarse en relación con el numeral 31 de la propia ley, porque como se desprende de la ejecutoria reproducida en líneas anteriores, el primero de dichos preceptos sólo efectúa una mención genérica de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes, por lo que, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para la determinación de cuándo una erogación es estrictamente indispensables para los fines de la actividad del aquéllos, resulta necesario interpretar dicho concepto, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

9

Precisado lo anterior, debe tenerse presente que del análisis de la resolución impugnada, se advierte que la misma se sustentó (fojas 49 a 106), esencialmente, en la improcedencia de las deducciones efectuadas por la actora respecto de "viáticos y gastos de viaje" y "eventos y convenciones" porque conforme al artículo 32, fracciones III y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dichas deducciones estaban expresamente prohibidas y la actora no acreditó encontrarse en los supuestos de excepción establecidos en tales fracciones, ya que del listado de clientes de la empresa no se advertía que los profesionales de la salud a quienes les otorgó viajes fueran sus clientes (ver foja 101 vuelta a 102 vuelta), por lo que era claro que los gastos, así como cualquier otra deducción por concepto de viáticos y gastos de viaje efectuados por la actora, no se ubicaba en la hipótesis de deducibilidad ya mencionada.

Asimismo, se advierte de la resolución impugnada que la autoridad fiscal, precisó que en el supuesto no concedido de que la actora no se ubicara en lo dispuesto por las fracciones III y V del numeral 32 referido, tampoco se actualizaba la hipótesis del artículo 31, fracción I, de la ley, porque la contribuyente no acreditó que se trataran de gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la empresa (ver foja 103 v 104).

Ahora, en la sentencia recurrida la sala estimó fundado el primer concepto de anulación, con apoyo en las consideraciones siguientes:

Que del artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en dos mil tres, se desprendía que los contribuyentes que tributaran en el Título II, al efectuar gastos indispensables de acuerdo con los fines de su actividad, podrían deducirlos, debiendo reunir para tal efecto los requisitos aplicables previstos en la referida ley.

Que por otra parte, era importante señalar que de los artículos 40 y 48 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, se advertía que la difusión que realizaba la Industria farmacéutica, en relación con los productos que ofrecía se encontraba reglamentada, y se preveía tanto la difusión con fines publicitarios como la promoción de información médica o científica.

Que por información médica, se entendía que era la dirigida a los profesionales de la salud a través de materiales filmicos o impresos, demostraciones, exhibiciones o exposiciones en relación con las enfermedades de los seres humanos, la prevención, tratamiento y rehabilitación. Por otro lado, la información científica era aquella dirigida a los profesionales de la salud sobre la farmacología de los principios activos y la utilidad terapéutica de los productos.

Que en ese sentido, era evidente que se encontraba legalmente reconocido que la industria farmacéutica promocionaba sus productos a través de la difusión de los mismos y, derivado de ello, realizaba erogaciones indispensables para los fines de su actividad, lo cual conlleva a lograr posicionamiento y comercialización de los productos que ofrecía.

Que la práctica de promoción, publicidad y propaganda de la industria farmacéutica, resultaba diferente a la de otras industrias, que se desarrollaba, por una parte, apoyando a los médicos por ser el único medio apto y especializado en la materia para prescribir sin poner en riesgo la salud de las personas —para que asistieran a eventos y convenciones, cubriendo en alguna medida los gastos de traslado y alojamiento inherentes a estos eventos, con el objeto de que conocieran las sustancias activas o propiedades de los productos que ofrecían para el tratamiento de los padecimientos o de un padecimiento en particular, lo que permitía a los médicos tomar una decisión racional a corto o mediano plazo sobre los medicamentos que resultaban idóneos, para atacar determinada enfermedad, dentro de los cuales, existían medicamentos que habían desarrollado los patrocinadores del evento, y que podían ser recomendados o prescritos por la comunidad médica a los pacientes.

Que, por otra parte, la promoción también se realizaba a través del otorgamiento de artículos promocionales recordatorios de marca que buscaran impactar de manera permanente en la recomendación y presencia del producto.

Que era importante destacar, que la finalidad económica de cualquier empresa que se constituía con un fin especulativo era el de obtener ingresos a través de la prestación de sus servicios, enajenación de bienes, etcétera, y para lograr dicho fin, era indispensable que sus servicios o bienes fueran dados a conocer a sus clientes, por lo que, la promoción resultaba indispensable para que las ventas reportaran una mejor productividad, esto es, que si se dejaba de realizar dicha actividad, su omisión impactaba de manera negativa en la generación de los ingresos y, por ende, no habría utilidades que permitieran la supervivencia de la empresa.

Que por lo tanto, el hecho de que la industria farmacéutica tuviera prohibido, por mandato legal, la promoción de sus productos a través de los medios convencionales, y que por ello recurriera a algún otro medio para promover sus productos como sucedía al realizar gastos encaminados a promover sus medicamentos entre los médicos, no significaba que estas erogaciones se encontraran desvinculadas de su capacidad generadora de ingresos, pues únicamente se trataba de una forma distinta de hacer promoción de los productos en comento.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

11

Que en ese sentido, de la lectura efectuada a la resolución impugnada, se advertía que para poder comercializar sus productos, la actora debía realizar erogaciones a efecto de promocionar los mismos a través de eventos y convenciones, y por ende, los gastos de viaje y la entrega de artículos promocionales que tenían como fin precisamente el promocionar sus productos, resultaban indispensables para sus actividades y producción de sus ingresos con independencia de que dichos gastos se erogaran para la promoción de medicamentos entre la comunidad médica.

Que por ello, era evidente que las erogaciones efectuadas por concepto de gastos de viaje, en las cuentas denominadas "viáticos y gastos de viaje", "eventos y convenciones", en cantidad de \$26'474,886.00 (veintiséis millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), eran indispensables para el desempeño de la actividad del contribuyente, toda vez que en caso de no producirse las referidas erogaciones, la actora se vería impedida para dar a conocer sus productos, por lo que, era evidente que dichos gastos servían directamente para la obtención de sus ingresos, y, por ende, eran erogaciones estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la parte actora, de conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre Renta, vigente en dos mil tres; precepto que establecía que todos los sujetos pasivos que pretendían deducir gastos, tenían que cumplir con el requisito de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, lo que en el caso, aconteció plenamente.

Que lo anterior, en virtud de que al tratarse de una práctica sui generis de promoción de productos de la industria farmacéutica; a la que pertenecía la hoy actora, la indispensabilidad debía analizarse partiendo de la premisa de que los citados gastos constituyan erogaciones estrictamente indispensables para los fines de la actividad empresarial de la demandante y reflejaban su capacidad real de contribuir al tratarse de gastos estructurales.

Que servía de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: *"MUESTRAS MÉDICAS, DEDUCCIONES POR GASTOS DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y REGLAMENTO DE PUBLICIDAD PARA ALIMENTOS, BEBIDAS Y MEDICAMENTOS."*

Que también resultaba aplicable, la tesis la. XXX/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: *"DEDUCCIÓN DE GASTOS NECESARIOS E INDISPENSABLES. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA."*

Que conforme a los referidos criterios, los gastos erogados por la actora eran indispensables para el desempeño de su actividad, ya que de no producirse los mismos, se vería impedida para dar a

conocer sus productos, por lo que, era evidente que dichos gastos servían directamente para la obtención de sus ingresos, y por ende, eran erogaciones estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la demandante, de conformidad con el artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2004 (sic); situación que se desprendía incluso de la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la actora, específicamente, de la lectura al dictamen rendido por [REDACTED] en su carácter de perito tercero designada por ese Tribunal, que en su parte conducente señalaba:

"...6. Diga el perito si en los registros contables de la sociedad [REDACTED] se puede apreciar el incremento de las ventas de los productos publicitarios durante las campañas y lanzamientos de los [REDACTED] y de los medicamentos publicitados en los congresos de ENDOCRINOLOGÍA, NEUROPSIQUIATRÍA Y NEUROPEDIATRÍA.- Respuesta: En los registros contables de la sociedad [REDACTED] se puede apreciar el incremento de las ventas de los siguientes productos durante las campañas y lanzamientos de: [REDACTED] y de los medicamentos de ENDOCRINOLOGÍA, NEUROPSIQUIATRÍA Y NEUROPEDIATRÍA."

Que de lo anterior se desprendía que la actora sí registró adecuadamente los costos y gastos por concepto de publicidad y propaganda, eventos y convenciones, viáticos y gastos de viaje durante el ejercicio fiscal de dos mil tres, los cuales se incurrieron para generar los ingresos de dicho ejercicio, por lo que, los mismos eran estrictamente indispensables para el desempeño de su actividad, sin que fuera necesario que su deducibilidad quedara condicionada al cumplimiento de los requisitos a que se referían las fracciones III y V del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres, en virtud de que tal y como se había precisado, en la especie, se estaba ante gastos de promoción deducibles atendiendo a su carácter indispensable para la actora a efecto de que pudiera colocar sus productos en el mercado, y por ende, no era dable condicionar la deducibilidad atendiendo a los requisitos establecidos para erogaciones que no eran estrictamente promocionales, como sucedía con los viáticos y obsequios efectuados directamente al público consumidor.

Lo anterior, dijo la quo, si se consideraba que la fracción III del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establecía como no deducibles las atenciones y obsequios que no se otorgaran a sus clientes de forma general; era evidente que dicho requisito únicamente resultaba aplicable a la operación normal de cualquier industria que tenía relación directa vendedor-cliente, sin que su alcance previera la existencia de una relación vendedor intermediario-

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

13

cliente, como acontecía en el caso de la actora, cuyos gastos antes referidos, resultaban ser estrictamente indispensables que impactaban en la generación de sus ingresos, y no meros obsequios como lo sostenía la autoridad demandada, precisándose que cualquier rechazo a su deducibilidad como gastos estrictamente indispensables, tendría que ser en términos de los artículos 29, fracción III y 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres, y no así, frente a los requisitos específicos que contemplaba el diverso 32 de dicha ley; pues el mismo se refería a erogaciones que si bien podían guardar cierta relación con la actividad del contribuyente, no se trataba de gastos estrictamente indispensables como acontecía en el asunto.

Que era importante precisar, que la fracción V del artículo 32 del ordenamiento legal en comento, establecía límites a gastos de viaje; sin embargo, en el caso, los gastos efectuados por la actora eran para la promoción de sus productos y por ende, se encontraban directamente vinculados con la generación de sus ingresos, por lo que, debían ser considerados como deducibles.

Que la promoción de los medicamentos de la actora comenzaba desde la participación de los médicos en eventos educativos y científicos hasta la erogación de los gastos necesarios para que acudieran a los mismos, por lo que, era evidente que esos gastos o costos formaban parte de un proceso de promoción, el cual difería de los realizados por cualquier otra industria, tanto como difería de los viáticos en estricto sentido, pues no se trataba de gastos erogados para que la persona que se trasladara cumpliera una encomienda laboral, sino para agrupar a los profesionistas de la salud y efectuar la promoción directa de los medicamentos que la actora comercializaba, y así, obtener sus ingresos.

Que de esa manera, era evidente que lo dispuesto en la fracción V del artículo 32 del ordenamiento legal en comento, limitaba los obsequios o atenciones fuera de una relación estricta de negocios, y controlaba el pago de viajes que, dentro de una relación laboral, no se realizaran con los fines que encomendaba el patrón, lo que en el caso no acontecía, toda vez que tal y como lo mencionó con anterioridad, se estaba en presencia de gastos promocionales encaminados a mejorar las ventas de la actora y, por ende, a incrementar sus ingresos, lo que evidenciaba la necesidad de realizar dichas erogaciones, basada en que precisamente los clientes conocieran sus medicamentos, lo que únicamente podía suceder con la intervención de los médicos.

Que en tal virtud, era evidente que los gastos de promoción realizados por la demandante, eran inherentes a su objeto social y se encontraban estrechamente vinculados a la obtención de sus ingresos, lo anterior, atendiendo al contexto en el que se desenvolvía la industria farmacéutica y, por ende, en el caso, se ubicaba en lo dispuesto por los artículos 29, fracción III y 31, fracción I

de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres, resultando procedente, en consecuencia, la deducción de las erogaciones que llevó a cabo.

Que por lo tanto, procedía declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al actualizarse la causal de ilegalidad prevista por el artículo 51, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se había emitido en contravención de lo ordenado por el artículo 31, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pues las deducciones rechazadas por la demandada sí eran estrictamente indispensables para la percepción de los ingresos de la parte actora.

Sentadas las razones que llevaron a la sala a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada -como se anticipó- devienen esencialmente fundados el primer y tercer agravio hechos valer por la autoridad recurrente.

En efecto, pues por una parte, como de manera correcta lo señala la autoridad recurrente en su primer agravio, las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje, eventos y convenciones, no resultan indispensables para alcanzar los fines de la actividad que desarrolla la parte actora, tal como prevé el artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ello es así, pues si bien están relacionadas con la actividad de la empresa actora, lo cierto es, que las mismas no resultan necesarias para alcanzar los fines de la actividad que desarrolla y, por tanto, el hecho de que éstas se realicen o no, no afecta o entorpece su normal funcionamiento o desarrollo.

Sobre el particular, conviene tener presente como se expuso en líneas anteriores, que para que un gasto se considere estrictamente indispensable debe colmar los requisitos siguientes: a) Estar relacionado directamente con la actividad de la empresa, b) Ser necesario para alcanzar los fines de su actividad, y c) Afectar el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de no realizarse.

En la especie este Tribunal Colegiado estima que se cumple con la primera condición, no así con las dos últimas, pues como ya se expuso, las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje, eventos y convenciones, no son necesarias para alcanzar los fines de su actividad, ni afectan el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de no realizarse.

Sin que sea óbice para lo anterior, el que sala estimara que los referidos gastos resultaban estrictamente indispensables para la empresa actora, en virtud de que la práctica de promoción, publicidad y propaganda de la industria farmacéutica, era diferente a la de otras

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍASECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

15

industrias, por lo que se apoyaba a los médicos por ser el único medio apto y especializado en la materia para prescribir sin poner en riesgo la salud de las personas, para que asistieran a eventos y convenciones, cubriendo en alguna medida los gastos de traslado y alojamiento inherentes a estos eventos, con el objeto de que conocieran las sustancias activas o propiedades de los productos que ofrecían para el tratamiento de los padecimientos o de un padecimiento en particular, lo que les permitía tomar una decisión racional a corto o mediano plazo sobre los medicamentos que resultaban idóneos, para atacar determinada enfermedad, dentro de los cuales, existían medicamentos que habían desarrollado los patrocinadores del evento, y que podían ser recomendados o prescritos por la comunidad médica a los pacientes y; porque el hecho de que la industria farmacéutica tuviera prohibido, por mandato legal, la promoción de sus productos a través de los medios convencionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, debía recurrir a algún otro medio para promover sus productos como sucedía al realizar gastos encaminados a promover sus medicamentos entre los médicos.

Elo es así, pues aun cuando las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje y eventos y convenciones, están relacionadas con el objeto social de la empresa actora; no resultan indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse las mismas no se obstaculizaba el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa actora.

En efecto, si bien tales gastos pueden influir en la venta de los medicamentos que comercializa, no menos cierto es que ello no garantiza la enajenación del producto, como de manera correcta lo señala la autoridad recurrente.

En efecto, como argumenta la recurrente las citadas erogaciones pueden llevarse a cabo, de otro modo, esto es, invertirse en la elaboración de folletos publicitarios, carteles, muestras médicas, que pudieran ser colocados en los consultorios médicos y/o entregarlos a los médicos, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta.

En otras palabras, la parte actora, a efecto de llevar a cabo su objeto social, es decir, la comercialización de sus productos, no necesariamente tenía porque financiar a los médicos su asistencia a diversas convenciones o congresos médicos, pues pudo dar a conocer a los profesionales de la salud las características y propiedades medicinales de los productos que enajena a través de otros medios y causar el mismo efecto tanto en quien prescribe el medicamento como en el paciente.

En tales condiciones, es inconcuso que el hecho de que la práctica de promoción, publicidad y propaganda de la industria farmacéutica, resulte diferente a la de otras industrias; que la misma tenga prohibido, por mandato legal, la promoción de sus productos a través de los medios convencionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, y que por ello tenga que recurrir a algún otro medio para promover sus productos, ello no significa que no pueda llevar a cabo la promoción de aquéllos, de otra forma, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta, lo que además es acorde con lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento que se comenta.

En efecto, el artículo 40 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, dispone:

"ARTÍCULO 40. En materia de medicamentos y remedios herbolarios, la publicidad se clasifica en:

I. Publicidad dirigida a los profesionales de la salud, que comprende:

a. La información sobre las características y uso de los medicamentos y

b. La difusión con fines publicitarios o promocionales de información médica o científica. Información médica es la dirigida a los profesionales de la salud, a través de **materiales filmicos, grabados o impresos, mediante demostraciones objetivas, exhibiciones o exposiciones** sobre las enfermedades del ser humano, su prevención, tratamiento y rehabilitación. Información científica es la dirigida a los profesionales de la salud sobre la farmacología de los principios activos y la utilidad terapéutica de los productos en el organismo humano, y

II. Publicidad dirigida a la población en general, que comprende:

a. La difusión que se realice de los medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y

b. La difusión que se realice de los remedios herbolarios."

De este precepto se desprende en lo conducente que en materia de medicamentos y remedios herbolarios, la publicidad dirigida a los profesionales de la salud, que comprende la información sobre las características y uso de los medicamentos y la difusión con fines publicitarios o promocionales de información médica o científica.

Que la información médica es la dirigida a los profesionales de la salud, a través de **materiales filmicos, grabados o impresos, mediante demostraciones objetivas, exhibiciones o exposiciones sobre las enfermedades del ser humano, su prevención, tratamiento y rehabilitación y;**

Que la información científica es la dirigida a los profesionales de la salud sobre la farmacología de los principios activos y la utilidad terapéutica de los productos en el organismo humano.

En este orden de ideas, si bien es cierto como lo aduce la sala que la práctica de promoción, publicidad y propaganda de la

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

17

industria farmacéutica, resulte diferente a la de otras industrias y que la misma tenga prohibido, por mandato legal, la promoción de sus productos a través de los medios convencionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo del 40 el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad; ello no significa que la aquí actora tenga que realizar erogaciones por concepto de viáticos y gastos de viaje y eventos y convenciones, para publicitar sus productos, porque como ya se vio, puede llevar a cabo la promoción de aquéllos, de otra forma, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta, lo que además es acorde con lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento que se comenta.

De ahí que se concluya que las erogaciones realizadas por concepto de viáticos, gastos de viaje, eventos y convenciones, aun cuando están relacionadas con el objeto social de la empresa actora; no resultan indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse las mismas no se obstaculiza el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa actora.

Por estas razones, a juicio de este tribunal también asiste razón a la recurrente cuando afirma en su tercer agravio:

Que es incorrecto que la sala fiscal resuelva que lo establecido por la fracción III del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no resulta aplicable a la operación de la parte actora al no prever la existencia de una relación vendedor-intermediario-cliente, pues el rechazo de su deducibilidad tendría que ser en términos de los artículos 29, fracción III y 31, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Que resulta ilegal lo considerado por la a quo en el sentido de que las erogaciones realizadas por la contribuyente por concepto de obsequios, atenciones, viáticos y gastos de viaje, eventos y convenciones son estrictamente indispensables para el desempeño de su actividad y, por ende, que no era necesario que su deducibilidad quedara condicionada al cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones III y V del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres.

Lo anterior es así, porque como ya se expuso, aun cuando las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje y eventos y convenciones, están relacionadas con el objeto social de la empresa actora, las mismas no resultan indispensables para alcanzar su fin; entonces, contrariamente a lo que adujo la sala, su deducibilidad sí queda condicionada al cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones III y V del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres.

En efecto, debe tenerse presente que el sustento de la resolución impugnada (fojas 49 a 106) fue, esencialmente, la improcedencia de las deducciones efectuadas por la actora respecto de "viáticos y gastos de viaje", "eventos y convenciones" porque conforme al artículo 32, fracciones III y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dichas deducciones estaban expresamente prohibidas, y la actora no acreditó encontrarse en los supuestos de excepción establecidos en tales fracciones, ya que del listado de clientes de la empresa no se advertía que los profesionales de la salud a quienes les otorgó viajes fueran sus clientes (ver foja 101 vuelta a 102 vuelta), por lo que era claro que los gastos, así como cualquier otra deducción por concepto de viáticos y gastos de viaje efectuados por la actora, no se ubicaba en esa hipótesis. Además, la demandada determinó que, suponiendo sin conceder que la actora no se ubicara en lo dispuesto por las fracciones III y V del numeral 32 referido, tampoco se actualizaba el supuesto del artículo 31, fracción I de la Ley citada, porque la contribuyente no acreditó que se trataran de gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la empresa (ver foja 103 y 104), cuestión esa última que -como ya se expuso-, este Tribunal Colegiado estima ajustada a derecho.

En consecuencia, al resultar esencialmente fundados el primer y tercer agravio hechos valer de la recurrente, lo procedente es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la sala deje subsistente la sentencia combatida y en su lugar emita una nueva, en la que atendiendo los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, resuelva lo que en derecho corresponda.

Al haber resultado fundados los agravios analizados, resulta innecesario el examen de las restantes agravios, pues en nada variaría el sentido de este fallo.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número VI.2o.A. J/9, publicada en la página dos mil ciento cuarenta y siete, tomo XXIII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado."

Finalmente, tomando en consideración que por auto de presidencia de este tribunal de veintiocho de noviembre de dos mil trece, se tuvieron por formulados los alegatos de la parte actora; el Pleno de este tribunal determina que no son de tomarse en cuenta.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:

LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

19

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.A. J/3, consultable en la página 847 del Tomo XI, abril de 2000, materia administrativa, Instancia: Tribunales Colegiados, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"ALEGATOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B de la Constitución Federal, el recurso de revisión fiscal se sujetará a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en amparo indirecto; ahora bien, aun cuando el artículo 79 de este último ordenamiento faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios "así como los demás razonamientos de las partes" sin embargo, del análisis del citado precepto se advierte que se logra resolver la cuestión efectivamente planteada mediante el análisis de las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, examinadas a la luz de los argumentos expresados en vía de agravios, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en la revisión fiscal, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación; razón por la cual, las manifestaciones vertidas por el actor a través de un escrito de alegatos, constituyen simples opiniones carentes de la fuerza procesal que la propia ley le reconoce al escrito de expresión de agravios, de ahí que no constituya una obligación para el Tribunal Colegiado entrar al estudio de dichos razonamientos".

Por lo expuesto, y fundado en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se **resuelve**:

PRIMERO. Es procedente y fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia recurrida.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, es competente para resolver el presente asunto por razón de la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así mismo, es competente por razón de territorio de conformidad con lo señalado por los artículos 2º fracción II y 38-bis de la Ley antes citada, en relación con los

diversos 23-bis fracción I y párrafo segundo del Reglamento Interior de este Tribunal, y Artículo Primero, fracción I del Acuerdo G/5/2012, por el que se determinan las Salas Regionales que serán apoyadas por las Salas Auxiliares del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, emitido por el Pleno de la Sala Superior en su integración de once Magistrados.

SEGUNDO. Esta Sala es competente para emitir el presente fallo con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo, en virtud de que se cumplimenta una ejecutoria en la que la Justicia de la Unión revoca la sentencia de doce de julio de dos mil trece, emitida por este Tribunal, por tal motivo, se procede a emitir una nueva atendiendo a los lineamientos señalados en la ejecutoria.

TERCERO. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, se atiende a los lineamientos en ella expuestos y se resuelva lo que en derecho corresponda

La parte actora en el primer concepto de anulación del escrito de demanda, señala que es ilegal la resolución impugnada, pues la demandada concluyó que dedujo indebidamente la cantidad de \$26'474,886.00 por "viáticos y gastos de viaje" y "eventos y convenciones", pues, según su cuestionable criterio, tales gastos no cumplen los requisitos previstos en los artículos 31, fracción I y 32, fracciones III y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en 2003, pues no son estrictamente indispensables, no están relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y no son ofrecidos a los clientes en forma general.

Para evidenciar lo anterior, basta analizar lo señalado por la autoridad a fojas 95, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108 y 111 de la resolución impugnada, en las que estableció lo siguiente:

"CONSIDERANDOS

(...)

TERCERO.-

(...)

Pág. 96

Del ejercicio de las facultades de comprobación realizada a [REDACTED] esta autoridad observó que realizó diversas erogaciones en cantidad total de \$26,474,886 pesos, relacionadas con obsequios otorgados a profesionales de la



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

21

salud, dichos gastos se consideraron deducibles en el ejercicio de 2003 y se clasificaron de la siguiente forma:

(...)

Pág. 96

En este sentido, es necesario atender a lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003, misma que establece en el caso de la fracción III, que no son deducibles los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en general y **en el caso específico de los viáticos a favor de médicos**, la fracción V, establece que las personas beneficiarias de los gastos de viaje o viáticos, destinados al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo I del Título IV de la ley del Impuesto sobre la Renta (de las personas físicas, de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado) o deben estar prestando servicios profesionales, a efecto de que sean considerados como gastos deducibles.

(...)

Pág. 100

Derivado de lo anterior, resulta claro que **las erogaciones que [REDACTED] realizó durante 2003** relativas a viáticos y gastos de viaje, **otorgados a profesionales de la salud**, en cantidad total de \$26,474,886 pesos, no forman parte de la deducción por concepto de publicidad que les está permitida realizar a la industria farmacéutica, aún y cuando de acuerdo a los diversos ordenamientos en materia de salud si le está permitido a la industria farmacéutica realizar ciertos obsequios o publicidad a los profesionales de la salud bajo algunas reglas, esto no implica que fiscalmente dichos obsequios sean deducibles.

Pág. 101

Al respecto, esta autoridad considera que **los gastos por los conceptos antes mencionados otorgados a médicos** son no deducibles, toda vez que como ha quedado demostrado son gastos que no se ubican en el supuesto de excepción contenido en la fracción III del artículo 32 de la Ley del impuesto sobre la Renta, así como tampoco cumplen con el requisito de ser estrictamente indispensables establecido en la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003.

(...)

Pág. 102

Al respecto esta autoridad considera que los gastos por concepto de "Viáticos y gastos de viaje" en cantidad de \$26,474,886 pesos, otorgados a los profesionales de la salud son no deducibles por ubicarse en los supuestos establecidos en las fracciones III y V del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003 y en atención a la fracción I del artículo 31 de la Ley del ordenamiento legal en comento, toda vez que como ha quedado demostrado son gastos que tampoco cumplen con el requisito de ser estrictamente indispensables.

(...)

Pág. 104

Como lo ha analizado esta autoridad en sus argumentos vertidos en el oficio de observaciones en cita, resulta claro que los viáticos o gastos de viaje que [REDACTED] erogó a favor de los profesionales de la salud durante el ejercicio de 2003, en cantidad de \$26,474,886 pesos, no forman parte de la publicidad que les está permitida realizar a la industria farmacéutica, aunque esta autoridad reconoce que de acuerdo a los diversos ordenamientos en materia de salud si le está permitido a la industria farmacéutica realizar ciertos obsequios a los profesionales de la salud bajo algunas reglas, sin embargo, esto no implica que fiscalmente dichos obsequios sean deducibles.

Pág. 105

En este orden de ideas, se tiene que aún y cuando el representante legal de [REDACTED] pretende inducir a un error de apreciación manifestando mediante escrito de fecha 30 de abril de 2009, que una de las formas válidas y legales de promocionar y publicitar sus productos, es por medio del envío de profesionales de la salud a diversos seminarios, convenciones, exposiciones, etc., lo cierto es que en la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de publicidad, en ningún momento se establece que para tal efecto los laboratorios, como resulta ser [REDACTED] tengan que enviar a los profesionales de la salud a los diversos eventos y convenciones que organizan en lugares tales como Puerto Vallarta, Cancún, Monterrey, Yucatán, Paris, Atlanta y otros destinos turísticos a fin de publicitar sus productos, incurriendo en erogaciones excesivas, situación que de ninguna manera significa que el fisco federal deba asumir el costo de dichos obsequios por concepto de viáticos y gastos de viaje en cantidad de \$26,474,886 pesos, al considerarlos el contribuyente como gastos por propaganda y publicidad deducible.

(...)

Por tanto, el hecho de que exista norma que permita la difusión con fines publicitarios o promocionales dirigida a los profesionales de la salud, no implica que los gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje erogados por [REDACTED] en cantidad de \$26,474,886 pesos, en beneficio de



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

23

los médicos, se consideren en facto deducibles para efectos fiscales.

(...)

Pág. 106

En esta tesitura, se tiene que aún y cuando el representante legal de [REDACTED], manifiesta haber dado cumplimiento a los supuestos de excepción señalados en la fracción III del artículo 32 del multicitado ordenamiento legal, lo cierto es que no acreditó ninguna de estas dos circunstancias, puesto que como ya se ha analizado a lo largo de la presente resolución, tales viáticos y gastos de viaje no forman parte de la publicidad que la está permitida realizar a la industria farmacéutica, en adición a que a un médico no se le puede incentivar o influenciar de forma alguna con viajes que reciba, para prescribir un medicamento, pues únicamente podrá prescribirlo ejerciendo su juicio profesional aplicado de manera responsable en beneficio del paciente, previo conocimiento que posea de las propiedades de los medicamentos, mismo que [REDACTED] le proporciona mediante muestras médicas y folletos, cuyas características debieron haber sido autorizadas por la Secretaría de Salud, por lo que queda demostrado que tales viajes otorgados en beneficio de los profesionales de la salud, no tienen relación con la enajenación de productos o prestación de servicios realizados por [REDACTED]

(...)

Pág. 108

Derivado de lo anterior, no existe lugar a dudas que los profesionales de la salud a quienes [REDACTED] otorgó los viáticos y gastos de viaje durante 2003, no se encuentran dentro del listado de clientes.

(...)

En este sentido, los gastos efectuados por [REDACTED] en comento, son obsequios en beneficio de profesionales de la salud, no de clientes, por lo que es claro que se ubica en la hipótesis de no deducibilidad prevista en la fracción III antes señalada y no en el supuesto de excepción pues no cumple con ningún de los dos requisitos previstos para ello, por lo que no puede válidamente pretender efectuar una deducción que deviene en improcedente e infundada.

(...)

En este sentido, las manifestaciones del representante legal de [REDACTED] refuerzan el criterio de esta autoridad vertido en el oficio número 900 07-01-2009-23350 de fecha 26 de marzo de 2009, toda vez que tales aseveraciones de ninguna manera implican que el hecho de que [REDACTED] efectúe erogaciones por concepto de viajes para el envío de médicos a diversos eventos, estos deban recetar forzosamente los medicamentos o productos de tal laboratorio, lo cual conlleva a que tales gastos no pueden considerarse estrictamente indispensables, pues como se analizó anteriormente tales gastos no forman parte de la publicidad que les está permitida realizar a la industria farmacéutica, por lo que tal gasto no está relacionado directamente con la actividad de la empresa, y menos aún es necesario para alcanzar los fines de la misma.

(...)

Pág. 111

En adición a lo anterior, respecto a las manifestaciones del representante legal de [REDACTED] mediante escrito de fecha 30 de abril de 2009, en el sentido de que el envío de los médicos a los multicitados eventos, seminarios o convenciones, difiere totalmente del concepto de capacitación, toda vez que no se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 153-F de la Ley Federal del Trabajo, puesto que no existe relación laboral, se tiene que aún y cuando tal aseveración en ningún momento fue objeto de estudio en esta resolución, debe reconocerse que la misma fortalece el criterio de esta autoridad, en virtud de que se reitera, tales viáticos y gastos de viaje erogados a favor de los profesionales de la salud, no pueden considerarse deducibles de ninguna manera por los motivos antes expuestos, y más aún porque tal como lo reconoce el representante legal de [REDACTED] no existe relación laboral de los médicos con esta última.

(...)"

Las anteriores manifestaciones evidencian que no existe controversia respecto del destino de los gastos efectuados por mi mandante durante el ejercicio fiscal de 2003, por "viáticos y gastos de viaje" y "eventos y convenciones", pues la demandada expresamente reconoce que fueron erogados para que diversos profesionales de la salud acudieran a diversas convenciones y seminarios. [UBI PARTES SUNT CONCORDES, NI HIL AD JUDICEM (El juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo)]

Sobre estas bases, la litis sometida a la consideración de ese H. Tribunal únicamente versa en determinar si los gastos efectuados por mi mandante en favor de profesionales de la salud, por "viáticos y gastos de viaje" y "eventos y convenciones", para publicitar los productos que fabrica y comercializa [REDACTED]

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

25

[REDACTED] (medicamentos) son válida y legalmente deducibles para el impuesto sobre la renta, como lo sostiene la actora o, por el contrario, no lo son, como ilegal e infundadamente lo afirma la demandada.

Ahora bien, como se desprende de la resolución materia de la presente demanda de nulidad, la autoridad concluyó que: a) un médico no prescribe un medicamento por haber recibido viajes, cursos y otras atenciones de un laboratorio, como [REDACTED] sino que lo va a hacer en función a sus conocimientos y conforme a su juicio profesional independiente, en caso contrario, estaría violentando las normas de su ejercicio profesional.

Adicionalmente, la demandada afirmó que: b) los gastos efectuados por la actora por "viáticos y gastos de viaje" y "eventos y convenciones" no son deducibles, debido a que no forman parte de la publicidad que le está permitida realizar a la industria farmacéutica, pues según su dicho, la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de publicidad, en ningún momento establecen que para tal efecto, los laboratorios tengan que enviar a los profesionales de la salud a diversos eventos y convenciones que organizan en lugares como Puerto Vallarta, Cancún, Monterrey, Yucatán, Paris, Atlanta y otros destinos "turísticos" a fin de publicitar sus productos, incurriendo en erogaciones exhaustivas, situación que de ninguna manera significa que el fisco federal deba asumir el costo de tales gastos, al considerarlos el contribuyente como de propaganda y publicidad deducible.

Finalmente, en la resolución aquí impugnada, la demandada concluyó que: c) los citados gastos debieron cumplir con los requisitos previstos en la fracción V del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para 2003, es decir, que fuesen gastos que benefician a personas con las que se tenga una relación de trabajo en los términos del Capítulo I del Título IV de ese ordenamiento legal.

La autoridad demandada al formular la contestación de la demanda sostiene la legalidad de la resolución impugnada, al estimar que es infundado el concepto de anulación propuesto por la parte actora.

A juicio de este Tribunal el concepto de anulación propuesto por la parte actora es infundado, en atención a los siguientes razonamientos:

Las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje, eventos y convenciones, no resultan indispensables para alcanzar los fines de la actividad que desarrolla la parte actora, tal como prevé el artículo 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ello es así, pues si bien están relacionadas con la actividad de la empresa actora, lo cierto es, que las mismas no resultan necesarias para alcanzar los fines de la actividad que desarrolla y, por tanto, el hecho de que éstas se realicen o no, no afecta o entorpece su normal funcionamiento o desarrollo.

Sobre el particular, conviene tener presente que para que un gasto se considere estrictamente indispensable debe colmar los requisitos siguientes: a) Estar relacionado directamente con la actividad de la empresa, b) Ser necesario para alcanzar los fines de su actividad, y c) Afectar el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de no realizarse.

Se estima que se cumple con la primera condición, no así con las dos últimas, pues las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje, eventos y convenciones, no son necesarias para alcanzar los fines de su actividad, ni afectan el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa en caso de no realizarse.

Ello es así, pues aun cuando las erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de viaje y eventos y convenciones, están relacionadas con el objeto social de la empresa actora; no resultan indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse las mismas no se obstaculizaba el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa actora.

En efecto, si bien tales gastos pueden influir en la venta de los medicamentos que comercializa, no menos cierto es que ello no garantiza la enajenación del producto.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

27

En tales condiciones, es inconcuso que el hecho de que la práctica de promoción, publicidad y propaganda de la industria farmacéutica, resulte diferente a la de otras industrias; que la misma tenga prohibido, por mandato legal, la promoción de sus productos a través de los medios convencionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo del 40 el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, y que por ello tenga que recurrir a algún otro medio para promover sus productos, ello no significa que no pueda llevar a cabo la promoción de aquéllos, de otra forma, y ocasionar el mismo efecto tanto en el profesional de la salud como por parte de los pacientes que acuden a consulta, lo que además es acorde con lo dispuesto en el artículo 40 del reglamento que se comenta.

De ahí que se concluya que las erogaciones realizadas por concepto de viáticos, gastos de viaje, eventos y convenciones, aun cuando están relacionadas con el objeto social de la empresa actora; no resultan indispensables para alcanzar su fin, porque de no realizarse las mismas no se obstaculiza el normal funcionamiento o desarrollo de la empresa actora y por tanto no se actualiza el supuesto del artículo 31, fracción I de la Ley Impuesto Sobre la Renta, porque la contribuyente no acreditó que se trataran de gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad de la empresa.

Por lo antes expuesto se estima infundado el concepto de anulación propuesto por la parte actora.

CUARTO. La parte actora en el segundo concepto de anulación del escrito de demanda, señala que es ilegal el procedimiento de fiscalización, origen de la resolución impugnada, considerando que el veinticuatro de octubre de dos mil siete, la entonces Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional, mediante resolución contenida en el oficio 330-SAT-VII-16518 emplazo al contador público autorizado Alberto del Castillo Velasco Zepeda, quien formuló el dictamen para efectos fiscales de los estados financieros por el ejercicio fiscal de 2003, para la revisión de papeles de trabajo.

Asimismo, el 27 de febrero de 2008, la citada Administración notificó al contador público autorizado la resolución contenida en el oficio 900-07-01-2008-9657, mediante el cual le requirió información y documentación adicional respecto del dictamen fiscal de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de 2003.

Sin embargo, nunca fue legalmente notificada de copia de los oficios antes mencionados, con forme a lo ordenado por el artículo 55, fracción I, último párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, lo que resulta ilegal, por lo que procede se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por tener su antecedente en un acto viciado de origen.

La autoridad demandada al formular la contestación de la demanda, señala que es infundado el concepto de anulación propuesto por la parte actora, por lo que se debe reconocer la legalidad de la resolución impugnada.

A juicio de este Tribunal el concepto de anulación propuesto por la parte actora es infundado, en atención a los siguientes razonamientos:

En la especie respecto al agravio formulado por la parte actora, ya existe jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que a partir de la reforma al artículo 52-A, del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, se suprimió la obligación para las autoridades fiscales de notificar con copia al contribuyente el requerimiento de información o documentación al contador público, de donde deriva que la previsión reglamentaria debe considerarse suprimida, al respecto se cita la siguiente jurisprudencia:

“Época: Décima Época
Registro: 2002303
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 149/2012 (10a.)
Página: 654

“FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL CONTRIBUYENTE O AL CONTADOR PÚBLICO SOBRE EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ABROGADO, QUEDÓ SUPRIMIDA CON LA REFORMA

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:
LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

29

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006 AL ARTÍCULO 52-A DE DICHO CÓDIGO. La obligación de las autoridades fiscales de notificar al contribuyente el requerimiento de información o documentación al contador público, o bien, de notificar a éste el requerimiento a aquél, estuvo prevista en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación a partir de su inclusión en éste en 2004, el cual fue homologado con el artículo 55 del abrogado Reglamento de dicho ordenamiento que contenía disposición en ese sentido desde 1984; sin embargo, con la reforma al citado numeral 52-A, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, se suprimió la obligación para las autoridades fiscales de notificar con copia al contribuyente el requerimiento de información o documentación al contador público, de donde deriva que la previsión reglamentaria debe considerarse suprimida, en virtud de que, al modificarse el texto legal, hubo manifestación expresa del legislador en ese sentido, lo que se justifica en la medida en que el artículo 52-A establece el procedimiento especial y concreto al que debe ceñirse la facultad de comprobación consistente en la revisión de dictámenes financieros.

Contradicción de tesis 214/2012. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en la Paz, Baja California Sur (en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito). 26 de septiembre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 149/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de octubre de dos mil doce.

Nota:

Por ejecutoria del 3 de octubre de 2013, el Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 524/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa, 2a. XLIV/2009 de rubro: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 52-A, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL CONTADOR PÚBLICO, SIN NOTIFICAR AL CONTRIBUYENTE, NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO 14, SINO POR EL 16 DE LA CONSTITUCIÓN, Y CONFORME A ÉSTE NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA AHÍ PREVISTA.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 271.

Por ejecutoria del 20 de agosto de 2013, el Pleno declaró sin materia la contradicción de tesis 66/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que una de las Salas contendientes se apartó del criterio en contradicción, al plasmar uno diverso en posterior ejecutoria.”

De tal suerte que cuando se iniciaron facultades de comprobación del dictamen de estados financieros del ejercicio fiscal de 2003, ya se encontraba vigente la reforma al artículo 52-A, del Código Fiscal de la Federación, que suprime la obligación de notificar al contribuyente dictaminado copia del requerimiento de información y documentación al contador público, por tanto, el argumento formulado por la parte actora es infundado.

QUINTO. La parte actora en el tercer concepto de anulación del escrito de demanda, señala que son ilegales la multas, pues se demostró la procedencia de las deducciones que se efectuaron en el ejercicio fiscal de 2003, registradas contablemente como “viáticos y gastos de viaje” y “eventos y convenciones”.

La autoridad demandada al formular la contestación de la demanda, señala que es infundado el concepto de anulación propuesto por la parte actora, por lo que se debe reconocer la legalidad de la resolución impugnada.

A juicio de este Tribunal el concepto de anulación propuesto por la parte actora es infundado, en atención a los siguientes razonamientos:

La actora para sustentar su agravio parte de una afirmación no sustentada, como lo es la procedencia de las deducciones registradas contablemente como “viáticos y gastos de viaje” y “eventos y convenciones”, y que por tanto, la liquidación de multas son ilegales, sin embargo, ya fue materia de análisis en el considerando tercero del presente fallo, en donde se determinó improcedente las deducciones por esos conceptos, por lo que este Tribunal estima infundado el concepto de impugnación propuesto por la demandante.

Al resultar infundados los conceptos de anulación propuestos por la parte actora, lo procedente es reconocer la validez de la resolución impugnada, en términos de lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo.



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
PRIMERA SALA AUXILIAR.

EXPEDIENTE: 28599/09-17-10-3/865/13-PSA-4

ACTOR: [REDACTED]

MAGISTRADA PONENTE:

LIC. ROSA MARÍA DEL PILAR FAJARDO AMBÍA

SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. MARTÍN GONZÁLEZ LEDESMA

31

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 80 y 106 de la Ley de Amparo, es de resolver y se resuelve:

I.- LA PARTE ACTORA NO ACREDITÓ LOS EXTREMOS DE SU ACCIÓN, EN CONSECUENCIA;

II.- SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, PRECISADA EN EL RESULTANDO PRIMERO DEL PRESENTE FALLO.

III.- MEDIANTE ATENTO OFICIO QUE AL EFECTO SE GIRE AL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, REMITASELE COPIA DEL PRESENTE FALLO, PARA QUE SE SIRVA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO QUE SE DA A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISION FISCAL 694/2013.

IV.- NOTIFIQUESE.

Así lo resolvieron los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Licenciados **ROSA MARIA DEL PILAR FAJARDO AMBIA, FRANCISCO MANUEL OROZCO GONZÁLEZ** en su carácter de Presidente de esta Sala e **ISMAEL POSADA ARÉVALO**, Primer Secretario de la Segunda Ponencia de conformidad con el artículo 8° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ante la presencia del C. Secretario de Acuerdos quien da fe, Licenciado **Martín González Ledesma**.

Magistrados

Rosa María del Pilar Fajardo Ambía.

Ismael Posada Arévalo
Primer Secretario de Acuerdos
de la Segunda Ponencia de esta
Sala, en funciones de
Magistrado, en términos de lo
dispuesto por el artículo 8,
cuarto párrafo de la Ley
Orgánica de este Tribunal.

Francisco Manuel Orozco González

Lic. Martín González Ledesma.
Secretario de Acuerdos.
MGL*

*“El 08 de noviembre de 2024, la licenciada **MONTSERRAT PÉREZ SÁNCHEZ**, Secretaria de acuerdos con adscripción en a Décima Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse del **nombre del representante legal, la razón social y domicilio de la parte actora, el nombre de una perito y el nombre de diversas marcas comerciales. Conste.**”*